

CONFLICTO / IGLESIA DENUNCIA ATROPELLOS DE LA FUERZA PÚBLICA

Piden atención en Chocó

Año y medio después de la masacre de Bojayá (Chocó), organizaciones indígenas y de campesinos del Atrato se quejan de que las ayudas del Gobierno no han llegado.

Indígenas usados como escudos humanos por grupos paramilitares, prohibición de pesca, caza y transporte de alimentos y medicamentos además de desplazamientos masivos siguen viviendo los habitantes de Bojayá (Chocó), un año y medio después de la matanza de 119 personas.

Así lo denunciaron organizaciones del Atrato y la Iglesia, que pidieron ayer al Gobierno Nacional se les garantice no solo la seguridad en la zona sino que llegue atención humanitaria. Igualmente exigieron que la muerte de los 119 habitantes de este municipio —ocurrida el 2 de mayo del 2002 en la iglesia, a donde las Farc enviaron cilindros en medio de combates con paramilitares— no quede impune.

Respecto del múltiple crimen, la abogada Liliana Uribe, de la Corporación Jurídica Libertad, aseguró que tan solo se ha expedido una medida de aseguramiento para un jefe guerrillero. Explicó que al proceso no ha sido vinculado ningún paramilitar.

Agregó que las investigaciones en la Justicia Penal Militar contra miembros de la Fuerza Pública se quedaron en preliminares y que se está esperando un fallo de la

A PESAR de que se ha incrementado la presencia de las autoridades en los municipios ribereños del río Atrato, habitantes dicen que falta asistencia en salud y educación.

Julio César Herrera / EL TIEMPO

Procuraduría, que estudia las conductas de oficiales de la Primera División del Ejército, la Brigada 4, el Batallón Manosalva y la Armada Nacional.

“Nos han prometido muchas cosas y se cumplen a medias o nunca se llevan a cabo”, dijo Yemin Cuesta, representante de los habitantes de Bellavista, donde ocurrió la matanza.

Entre tanto, el sacerdote Jesús Flórez, de la Diócesis de Quibdó, afirmó que en los últimos meses los combates entre el Ejército, el frente 57 de las Farc y el Bloque ‘Élmer Cárdenas’ de las autodefensas se han expandido a todos los municipios que están en la ribera del río Atrato.

El sacerdote denunció que la Fuerza Pública ha cometido presuntos abusos en la región. Explicó que el pasado 28 de febrero hombres que portaban uniformes de la Policía llegaron en cuatro helicópteros a Bartolo y capturaron a adultos y niños de entre 2 y 9 años.

Por su parte, Alberto Achito, de la Organización Indígena Embera Wounnan-Orewa, acusó a los paramilitares de utilizar a indígenas como escudos en los combates.

Su preocupación es por las dificultades que afrontan las comunidades para garantizar el paso de alimentos y medicinas, pese a la presencia de las autoridades.